

DESDE LA LEALTAD HACIA LA CONVIVENCIA

Cataluña es una sociedad profundamente dividida. Hay catalanes que desean romper con el resto de España y otros que defendemos reforzar la España constitucional.

Esa división, siendo grave, no es la peor. La fractura puede ser definitiva cuando algunos de nuestros vecinos, para imponer su proyecto político rupturista, se sitúan al margen de la Ley, se apropian de las instituciones y privan de derechos al resto de sus conciudadanos. El nacionalismo secesionista se ha mostrado profundamente desleal con la Constitución y con los que la respetamos. Muchos catalanes todavía no nos hemos recuperado del sufrimiento generado por los hechos de septiembre y octubre de 2017 y vemos con recelo y profunda desconfianza que las instituciones autonómicas siguen trabajando de forma sectaria para constituir la pretendida república catalana en vez de servir al interés general.

Los dirigentes rupturistas y desleales con los valores de la democracia constitucional nos hicieron mucho daño: amenazaron nuestros proyectos vitales y nos enseñaron la antesala de una secesión que nos convertía directamente en extranjeros. Todavía siguen acosándonos. Desde luego, los que respetamos, entonces y ahora, el orden constitucional no somos responsables de la tensión social. La convivencia en Cataluña no puede reconstruirse sobre la impunidad de unos y la invisibilidad de otros. El camino no es olvidar los delitos cometidos por los desleales, enjuiciados con todas las garantías procesales, y marginar y silenciar a las víctimas de aquellas acciones.

No podemos legitimar la desobediencia ni premiar el recalcitrante incumplimiento de la ley. No vamos a sonreír a los que despojan los edificios públicos de nuestros símbolos constitucionales, no vamos a complacer a los que eliminan la coexistencia lingüística de las instituciones y de la educación; no vamos a dejar de denunciar a los medios públicos de comunicación que hacen propaganda y sirven a la desinformación; no vamos a disculpar a los que pretenden destruir nuestra Nación democrática de ciudadanos libres e iguales; ni tampoco vamos a desistir de enfrentarnos a los que nos empobrecen.

Estamos convencidos de que hay que dar pasos para conseguir la concordia e invitar a los rupturistas a que trabajen en la senda de la reconstrucción. Sin embargo, hasta ahora no lo han hecho y, además, se jactan de ello. En esas

condiciones la concesión del indulto colectivo que promueve el Gobierno de la Nación no es útil para la sociedad, es una decisión con graves consecuencias para la justicia y la democracia. Ensancha la herida que queremos cerrar.

Desde hace años trabajamos para derribar las tapias de la intolerancia y para que se pueda ver la realidad compleja y plural de Cataluña. El Gobierno de la Nación y las instituciones catalanas han de asumir que aquí hay secesionistas, pero también muchos catalanes que defendemos la España constitucional y pretendemos que se reconozcan nuestros derechos, más cuando reclamamos lo obvio: el acatamiento y respeto a la ley constitucional, el cumplimiento de las resoluciones judiciales y la garantía de los derechos de todos.

No habrá avances significativos en Cataluña si no se asume de una vez por todas que los constitucionalistas en Cataluña llevan siendo invisibilizados política y socialmente durante demasiado tiempo y que tienen una agenda de demandas y exigencias, históricamente desatendidas por los gobiernos autonómico y estatal. Nos negamos a seguir jugando un papel subalterno de comparsas de las élites nacionalistas. El desafío del secesionismo catalán no se soluciona con la estrategia del apaciguamiento a los desleales, sino con el empoderamiento de aquellos que defendemos la democracia constitucional.

Sin lealtad no hay solución, sin rectificación no son procedentes gestos de acercamiento. Desde la parte de la sociedad catalana que representamos queremos dejar muy claro que la reconstrucción de la convivencia no pasa por poner en marcha un mecanismo destinado para perpetuar nuestro sometimiento al falso dogma de que a Cataluña sólo la representa el nacionalismo secesionista.

El diálogo entre catalanes es imposible si quienes están al frente de las instituciones autonómicas no aceptan nuestra existencia como ciudadanos con derechos y se niegan sistemáticamente a atender nuestras demandas. También fracasará si el Gobierno de España no se compromete a trabajar para un futuro común en el que quepamos todos los españoles, un futuro que tiene que ser respetuoso con el estado de derecho y el pluralismo político inherente a cualquier democracia consolidada.

En Barcelona, a 8 de junio de 2021

mesacivicaconstitucionalista@gmail.com